

Septiembre 24 de 1954

36ª REUNION — 32ª SESION ORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE,
vicepresidente de la Nación

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

ALBARINO, Ramón A.
ANGULO, Rodolfo Antonio
BAZAN, Miguel Ángel
BRISOLI, Blas
CALVINO DE GÓMEZ, María Rosa
CASTAÑEIRA DE BACCARO, Hilda Nélida
CORREA, Antonio Eduardo
CORRECHÉ, Susana
DE PAOLIS, José Guillermo
DURAND, Alberto
GIMÉNEZ, Francisco
GRAZIANO, Alberto A.
HERRERA, Paulino B.
IBARGUREN, Prudencio M.
JUAREZ, Carlos A.
LARRAURI, Juana
LUCO, Francisco R.
NAVARRO, Ramón M.
PIERANGELI VERA, Humberto
PINEDA DE MOLINS, Ilda Leonor
RIERA, Fernando
RODRIGUEZ LEONARDI DE ROSALES, Elvira E.
RUIZ VILLASUSO, Eduardo Pío
VELAZCO, J. Filomeno
XAMENA, Carlos
ZAVALA ORTIZ, Ricardo

AUSENTES, EN MISIÓN ESPECIAL:

AMADO, Elías Teodoro F.
ANTINUCCI, Atilio
CASCO DE AGUER, María del Carmen
FERRARI, Juan Antonio
ITURBE, Alberto J.

AUSENTE, CON LICENCIA:

DI GIROLAMO, Elena

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensajes del Poder Ejecutivo:

Comunicando la promulgación de leyes.
(Página 742.)

II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara
de Diputados. (Página 742.)

III.—Peticiones particulares. (Página 743.)

2.—A moción del senador De Paolis se fijan los
asuntos a considerar en la sesión. (Página 743.)

3.—Consideración del despacho de la Comisión Mu-
nicipal en el proyecto de comunicación del sen-
ador Xamena sobre rectificación del nombre
de la actual avenida Gaona por el de avenida
Calisto Gauna. Se aprueba. (Página 743.)

4.—Consideración del despacho de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Políticos en el pro-
yecto de ley, en revisión, por el que se acuerda
permiso para aceptar empleos y honores. Se
aprueba. (Página 744.)

5.—Consideración del despacho de la Comisión de
Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos
en el mensaje y proyecto de ley del Poder Eje-
cutivo por el que se establecen reservas de do-
minio para la Nación respecto de bienes ubica-
dos en las provincias Presidente Perón y Eva
Perón. Se aprueba. (Página 746.)

6.—Consideración del despacho de la Comisión de
Trabajo, Previsión Social y Peticiones en el
proyecto de ley, en revisión, sobre pago de sala-

Finalmente, señora presidenta, considero oportuno exponer las razones que ha tenido en vista la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Peticiones, en cuyo nombre informo, para aconsejar la modificación del texto propuesto como segundo párrafo del artículo 19. Dice el original que: «A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá reajustar integralmente la escala de los capitales básicos a que puede optar el agente.» Tal expresión conduce a confusión, puesto que el capital básico tiene dos características distintivas: es uniforme y obligatorio para todo el personal. En cambio, el adicional es optativo y graduable en función del sueldo del agente. A fin de precisar el concepto, y de conformidad con el principio sancionado en la ley 13.003, se ha suprimido el término «básicos», con lo que se logra conciliar el fin propuesto de manera armónica con los principios de la ley.

En esto consiste, señora presidenta, la proposición sometida a la consideración del cuerpo. Como todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, está impregnada de un alto espíritu de justicia y de profundo contenido social, surgiendo del somero bosquejo que he hecho, con incontrastable evidencia, la bondad de sus fines y el acierto de sus términos, debiendo destacarse que su sanción habrá de materializar los objetivos de seguridad previstos en el segundo Plan Quinquenal.

La gestación del gobierno ya histórico del general Perón y la tarea de relevamiento integral del pueblo, a la que consagrara su vida Eva Perón, encuentran eco auspicioso en esta ley del Congreso justicialista que tan claramente traducen la esencia de nuestro movimiento y definen la fisonomía de nuestra doctrina.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, contraalmirante Alberto Teissaire.

Amparar al trabajo creador es elemental obra de buen gobierno. Por eso aplaudo sin reservas la iniciativa y solicito el voto unánime de las señoras y de los señores senadores en favor del proyecto en discusión, nacido a la luz de una nueva conciencia social argentina, que asegura para nosotros y para nuestra posteridad una vida feliz, al abrigo de la injusticia y al amparo de principios que jerarquizan al hombre como valor positivo y como fuerza espiritual.

Sr. Presidente. — Si no se hace más uso de la palabra se va a votar, en general, el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto de ley.

Se hará la correspondiente comunicación a la Cámara de Diputados.

5

PROTECCION A LOS ANIMALES

(Orden del día número 62)

Sr. Secretario (Reales). — (*Leyendo*):

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos ha considerado el proyecto de ley, en revisión, sobre protección a los animales; y, por las razones que dará su miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del reglamento, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 27 de septiembre de 1954.

José G. De Paolis. — Carlos A. Juárez.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(Septiembre 22 de 1954)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Será reprimido, con prisión de 15 días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Art. 2º — Serán considerados actos de maltrato:

- 1º No alimentar en cantidad y calidad suficientes a los animales domésticos o cautivos.
- 2º Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.
- 3º Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas.
- 4º Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado.
- 5º Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos.
- 6º Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Art. 3º — Serán considerados actos de crueldad:

- 1º Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
- 2º Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad.
- 3º Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean

terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada.

- 4º Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia.
- 5º Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones.
- 6º Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato.
- 7º Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad.
- 8º Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTONIO J. BENÍTEZ
Rafael V. González.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. De Paolis. — En nombre de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos, que me honro en presidir, tócame esta tarde la responsabilidad de informar el despacho sobre este proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, por el cual se establece el régimen legal de protección a los animales.

Este proyecto resulta de suma importancia y trascendencia, ya que con él nos colocamos a la par de las legislaciones más avanzadas sobre la materia, incriminando hechos que hieren a la moral pública y al sentimiento de humanidad que caracteriza a las colectividades cultas y civilizadas.

Ya el 25 de julio de 1891 se dictó la ley 2786, a instancias de la Sociedad Argentina de Protección a los Animales, y en particular de su presidente el doctor Ignacio Lucas Albarracín, la que resulta completamente inactual, por lo que propiciamos este nuevo proyecto.

Por el artículo 1º de dicha ley se declaran actos punibles los malos tratamientos contra los animales, y las personas que los realicen sufrirán, dice dicho artículo, una multa de dos a cinco pesos o, en su defecto, arresto, computándose dos pesos por cada día, para su conmutación.

Como vemos, señor presidente, esa sanción es ineficaz en la actualidad, porque la pena no es adecuada a la gravedad del delito.

Entrando a analizar la legislación vigente podríamos señalar que, además de esta ley 2786, nos encontramos también con el artículo 183 del Código Penal argentino que nos rige, el que establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Como vemos, el alcance de la figura delictiva comprendida en este artículo no es sino el de daño en cuanto se tratare de un animal total o parcialmente ajeno, y es una figura delictiva destinada a defender el patrimonio, lo que no hace a la esencia del proyecto que estamos considerando.

Además, nos encontramos también con una ordenanza de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, del 24 de abril de 1923, que reprime actos de crueldad con los animales.

Antecedentes del proyecto que estamos considerando se han presentado a lo largo de la vida legislativa del país, y así, entre los más significativos, podemos mencionar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo del 13 de marzo de 1947, y el presentado por el ex diputado doctor Sammartino el 3 de mayo de 1948. Luego, el mismo Poder Ejecutivo remitió el 8 de mayo de 1951 otro proyecto de ley, y en 1953 el actual presidente de la Cámara de Diputados, doctor Benítez, presentó el proyecto de ley de Protección a los Animales, que ha servido de base al estructurado por la Comisión pertinente de la Cámara de Diputados y que ha dado lugar a la sanción del proyecto de ley que estamos considerando.

Posteriormente, en 1954, en el mes de septiembre, fué presentado por el diputado Ferrer Zanchi un proyecto sobre este mismo tema.

Las legislaciones de casi todos los países han consagrado normas represivas a fin de proteger a los animales de los malos tratos, así como de los actos de crueldad que pudieran cometerse en su contra. Podemos mencionar como uno de los primeros antecedentes sobre esta materia la ley que se dictó en Inglaterra en 1832, a la que siguieron otras complementarias en los años 1849, 1854, 1885 y 1900.

En la ley del 18 de agosto de 1911 se hacía referencia a los actos de crueldad, sufrimiento inútil o combate de animales, como asimismo a la administración de drogas venenosas o dañinas. En Noruega, la ley del 7 de junio de 1935 establece la protección al animal, aunque sólo se trata de una legislación de carácter preceptivo. En Alemania, la ley del 21 de abril de 1935 se refiere a la matanza de animales de sangre caliente y prohíbe en términos genéricos los tormentos y los malos tratos.

En Suiza, la ley del 20 de noviembre de 1903 establece la incriminación por malos tratamien-

tos, castigando con prisión de 30 días y multas de 5 hasta 150 francos a quienes cometieran tales hechos. Bélgica, por ley del 22 de marzo de 1920, aplica un mes de prisión o multas de hasta 26.000 francos al culpable de malos tratos a los animales. En la India, la legislación de protección a los animales alcanza formas superlativas, debido a la concepción religiosa del pueblo hindú y a la vinculación que suponen del ser humano con todo ente viviente.

Importante resulta la legislación existente en los Estados Unidos, donde cada uno de sus Estados ha dictado leyes particulares sobre esta cuestión. Podemos mencionar el Estado de Nueva York, que pena el envenenamiento deliberado del animal, incriminándolo como felonía y sancionándolo hasta con 5 años de prisión. El Estado de Wisconsin, por ley del 8 de marzo de 1925, pena también con 500 dólares de multa y prisión de hasta 2 años los malos tratamientos a los animales. El Estado de Pennsylvania, según acta del 24 de junio de 1939, incorporada al Código Penal, sanciona con multa hasta de 1.000 dólares y prisión hasta de 3 años, o con ambas, la comisión de estos actos delictivos.

Si analizamos la legislación comparada de los países que hemos mencionado, podemos caracterizar tres tipos distintos: en primer lugar, los países que incriminan estas figuras delictivas como faltas, entre los que se encuentran Italia, España, Alemania, Hungría, Austria, Uruguay y Brasil. En segundo lugar, los países que las catalogan como delitos, entre los que figuran Finlandia y los Estados Unidos. Y, finalmente, un tercer grupo que no impone sanción alguna, sino que dicta normas de tipo preceptivo o de vigilancia, entre el cual podemos citar a Noruega, que, por ley del 7 de junio de 1935, no fija sanción alguna.

Resulta muy importante analizar la naturaleza jurídica de esta figura delictiva que estamos creando por el proyecto de ley que tenemos a nuestra consideración.

Se trata de considerar si los animales pueden ser sujetos de derecho. Las sanciones establecidas en este proyecto de ley, ¿tienden a la protección del animal considerándolo como sujeto jurídico? Ese es, justamente, un problema que deseo abordar, a los efectos de que quede aclarado con mi exposición cuál es la posición doctrinaria de la ley, ya que algunos tratadistas han considerado que existe un derecho animal.

En la antigüedad, los animales llegaron, inclusive, a ser considerados como sujetos activos del delito, y así se llegó a penar en la Edad Media a ciertos animales que habían cometido daños contra las personas. Pero el progreso doctrinario jurídico de la humanidad ha impedido que siguiera aplicándose este tipo de infracciones, por considerarse que los animales no son seres racionales y por lo tanto no pueden ser entes de derecho. Nuestra legislación civil con-

sidera a los animales como objetos de derecho y no como sujetos de derecho. Así, por ejemplo, el artículo 2.318 del Código Civil establece que «son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles».

Cuando este artículo utiliza las palabras: «sea moviéndose por sí mismas», se refiere a los animales o semovientes, y así los considera como objeto de derecho, asimilados a cosas.

Esta disposición tiene como fuente el artículo 528 del Código de Napoleón y el artículo 417 del código italiano, mencionados por Vélez Sarsfield en la nota al artículo de referencia.

Sólo el hombre, pues, puede ser titular de derecho y, como tal, sujeto activo y pasivo de derecho. Así lo ha entendido siempre la doctrina que ha abonado la legislación de los países más adelantados en la materia, y también los tratadistas que han comentado las disposiciones del Código de Napoleón, entre los cuales podemos mencionar a Baudry-Lacantinerie, Aubry y Rau, Demolombe, Demante, Laurent, Hue, Planiol, Capitant, y entre nosotros Colmo, Salvat, Lafaille, etcétera.

Cuando Korkounow en su libro titulado *Teoría general del derecho*, menciona a Bekker, señala que este autor admite que los animales pueden ser sujetos de algunos derechos. Y dice: «Si alguien deja por testamento ciertos bienes bajo la condición de que puedan servir después de su muerte al mantenimiento de su perro o de su caballo, estos animales devienen propietarios de estos bienes y son sujetos de ciertos derechos.» Afirmando, por mi cuenta, que se trata de un error jurídico, ya que en nuestro concepto aquí se confunde una obligación o carga del heredero o beneficiario, con lo que sería la existencia de un derecho del animal, que no es posible admitir.

Según el proyecto que consideramos, la incriminación de los malos tratamientos o de los abusos de crueldad contra los animales se ha hecho por medio de la figura del delito. Ha habido una gran discusión al respecto sobre si debiera haberse adoptado la figura del delito o la figura de la falta. Si se hubiera adoptado la figura jurídica de la falta, nos habríamos encontrado frente al problema de cuál es el poder que puede legislar en materia de faltas.

Hay tres corrientes doctrinarias al respecto: una, que señala que solamente puede legislar sobre faltas el Congreso Nacional, doctrina que abonan los doctores Peco, Ramos y Rivarola; una segunda señala que las provincias son las que deben legislar sobre faltas, pero que el Congreso puede dictar una ley de carácter general fijando el máximo de la pena; una tercera señala que las provincias pueden hacerlo sin limitación alguna, teoría que sostienen Alsina, Bielsa, González Calderón y González Roura.

Para no abordar esta discusión y allanar el camino, participando de la doctrina cuantitativa en el sentido de que entre el delito y la falta no existe una diferencia de calidad, sino de cantidad y de pena, hemos decidido legislar como delito mediante la atribución propia que compete al Congreso Nacional.

Aceptado este punto de vista, debemos analizar la figura del delito. Según Eusebio Gómez, el delito es un hecho humano, antijurídico, real y potencialmente lesivo de un bien o de un interés protegido por la ley. El doctor Soler define el delito diciendo que es una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas del mismo.

Desde otro punto de vista, y haciendo a lo que podríamos denominar una definición de delito desde el aspecto del derecho natural. Garófalo lo define diciendo que el delito lesiona los sentimientos altruistas de equidad y probidad que existen en un momento dado en la colectividad. Y Durkein dice que el delito lesiona a aquellos sentimientos que en una etapa social se encuentran en todas las conciencias sanas.

Analizando las definiciones, las de carácter objetivo, y éstas desde el punto de vista del derecho natural, nos encontramos con que para que exista delito debe haber un sujeto activo, uno pasivo, un objeto o bien jurídico protegido, una acción y un resultado.

Aceptados estos elementos constitutivos, debemos afirmar que el sujeto activo del delito solamente puede serlo el hombre, ya que es el único ser racional y responsable y que, por lo tanto, puede ser incriminado.

Conviene ahora señalar cuál es el sujeto pasivo del delito. Según Carrara, puede serlo el hombre o la cosa sobre la que recae el acto material culpable. Para Rocco, el sujeto pasivo del delito es siempre el hombre y nunca la cosa. Gómez dice que el sujeto pasivo del delito es el titular del derecho lesionado, y según Mancini el sujeto pasivo es siempre el Estado en su carácter de sujeto constante y principal.

Como resultado de este análisis, nuestra posición es la de que, si sólo las personas pueden ser titulares de un bien jurídico, en tal sentido, sólo pueden ser sujetos pasivos de un delito el hombre, las personas jurídicas, el Estado y la comunidad. En consecuencia, en el delito que estudiamos el sujeto pasivo es la comunidad y el bien jurídico que se protege es el sentimiento de piedad o sentimiento subjetivo de humanidad para con los animales. Es decir, que es todo aquello que hiere a la cultura y a la moral del pueblo. Coincidimos así con Mancini respecto de cuál es el bien jurídico protegido. Dicho autor, en el *Tratado de derecho penal italiano*, señala que en este caso está herido el sentimiento social de humanidad hacia los animales, que exige que cada cual se

abstenga de maltratar injustificadamente a aquéllos.

El proyecto en consideración señala en su artículo 1º que «será reprimido, con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales». Se destacan además en el proyecto las dos categorías de hechos punibles por la ley. La pena de quince días a un año ha sido tomada del artículo 183 del Código Penal, donde se reprime con esta pena el delito de daño que pueda cometerse inclusive contra los animales.

En los artículos 2º y 3º se especifican con carácter taxativo los hechos que deben considerarse como maltrato de los animales y como actos de crueldad; no puede existir ninguna otra situación, a más de las enumeradas, que pudiera ser penada por la justicia. Vale decir, que sus disposiciones tienen carácter restrictivo.

Sr. Xamena. — ¿Me permite una interrupción, señor senador, con permiso de la Presidencia?

Sr. De Paolis. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Xamena. — El artículo 3º, en su inciso 3º, señala que será considerado acto de crueldad «intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada».

Entiendo que debiera aclararse el significado de esta disposición, por cuanto quedaría involucrada en la misma, por ejemplo, la castración de los animales de granja, si no fuera practicada por médicos o veterinarios, lo cual, lógicamente, acarrearía numerosos inconvenientes. Sabido es que la castración de pollos en las granjas se realiza por cientos, y, según la norma a que me vengo refiriendo, debería ser practicada por profesionales.

Sr. De Paolis. — Voy a aclarar la observación del señor senador por Salta.

El problema que plantea no se encuentra comprendido en el inciso 3º del artículo 3º, sino en el inciso 2º del mismo artículo, que dice que será considerado acto de crueldad «mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad».

La situación a que hace referencia el señor senador se encuentra comprendida en el inciso que acabo de leer, por lo cual no es menester la intervención de médico o veterinario, siempre y cuando el hecho aludido tenga fines de mejoramiento.

Con estas palabras creo haber satisfecho las inquietudes del señor senador por Salta.

Sr. Albariño. — ¿Me permite, señor senador, con la autorización de la Presidencia?

Sr. De Paolis. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Albariño. — Yo considero que aquí se crea para nuestra ganadería un problema, porque, de acuerdo con esto, la castración podría ser acto de crueldad ya que, según el artículo 3º, «serán considerados actos de crueldad: ...mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento...».

La castración no tiene fines de mejoramiento. Se hace con fines industriales.

Sr. De Paolis. — En realidad, señor presidente, no deseaba hacer una discusión con respecto a los incisos, particularizándome con cada uno de los casos que los mismos contienen, por el hecho de que jamás podríamos abarcar la totalidad de las situaciones que puedan presentarse en la aplicación de la ley. En una legislación de tipo codificativo, lo mejor es dejar a la experiencia, que los casos se vayan sucediendo, y, conforme con las circunstancias y el análisis particular de cada uno de ellos, comprenderlos o no en la aplicación de la norma.

Nada que pueda perjudicar el interés general y el económico del país, y que haga a la promoción de la economía nacional en lo que se refiere a la industria ganadera, podría quedar sancionado por los alcances de esta ley, siempre que no se tratara de una crueldad o de un maltrato innecesario. Si el hecho se comete con intención cruel o de maltratar, si no está dirigido a conseguir un fin superior, ese hecho será punible; de lo contrario, no.

Asimismo, signífico que el proyecto no prohíbe la caza, ni la pesca, conforme a las reglamentaciones respectivas, como tampoco las luchas contra las especies declaradas «plagas», ni aquellos actos de adiestramiento para la defensa nacional, etcétera.

Sr. Xamena. — Creo, señor presidente, que para facilitar la interpretación de la ley, la aclaración era muy necesaria.

Sr. De Paolis. — Así es, señor senador, y cuando manifesté que no era mi propósito entrar a la discusión de cada uno de los incisos, sino dejar librados a la interpretación de la ley los casos particulares que pudieran presentarse, no he querido oponerme a que los señores senadores me formulen todas las preguntas que consideren conveniente hacer, ya que ellas pueden contribuir a la buena aplicación de la ley.

Sr. Ruiz Villasuso. — Si me permite el señor senador, desearía que me explicara si es prohibitivo que una persona idónea en la materia, aunque sin título de médico veterinario, pueda realizar intervenciones quirúrgicas, dado que en algunos lugares resulta difícil encontrar un profesional.

Sr. De Paolis. — La situación que plantea el señor senador por Presidente Perón está debi-

damente salvada en la parte final del inciso 3º que estamos considerando, cuando dice: «...salvo el caso de urgencia debidamente comprobada». Esta expresión no significa solamente la urgencia en el sentido de la inmediatez de la intervención quirúrgica del animal, sino también la dificultad de poder conseguir alguien que pueda realizarla en tiempo oportuno. Creo, pues, que la disposición es clara y no tiene el peligro planteado por el señor senador.

Sr. Ruiz Villasuso. — Todo acto de castración significa suprimir una parte del animal y ello representa una intervención quirúrgica.

Sr. De Paolis. — El caso que indica el señor senador no está comprendido en el inciso 3º, sino en el 2º, cuando dice: «Mutilar cualquier parte del cuerpo del animal.» No toda mutilación significa una intervención quirúrgica desde el punto de vista científico, caso éste comprendido en el inciso 3º del artículo.

Si no se hace otra pregunta por parte de los señores senadores, continuaré mi informe, señor presidente.

Quería referirme en particular al inciso 1º del artículo 3º que trata de la práctica de la vivisección. La Comisión de Legislación ha recibido en el día de hoy la presentación de una institución, solicitando que este inciso fuera derogado, ya que la misma repugna la práctica de la vivisección.

La comisión ha tenido muy en cuenta los sentimientos de piedad y los altos sentimientos de moral que persiguen los miembros integrantes de dicha institución, pero luego de analizar la legislación comparada no ha hecho otra cosa que afirmar la bondad de este inciso en razón de que la vivisección es practicada como una excepción y no como una norma, siguiendo la legislación más avanzada sobre la materia.

No hay ningún país del mundo que haya desterrado la vivisección, aunque fuera de desear que una práctica de esta naturaleza no se siguiera, siempre que se encontraran otros medios con los cuales poder experimentar y salvar a los seres humanos.

Se trata, en definitiva, de elegir entre encontrar los medios para la salvación de los seres humanos o decidirse por su sacrificio, en base a un sentimiento que es lógico que exista en el común de las gentes civilizadas. Pero mientras no se encuentre un campo de experimentación distinto que haga posible la supresión de esta práctica de la vivisección con fines científicos, la comisión va a sostener el inciso, ya que el mismo se encuentra abonado por la legislación de otros países, entre los cuales puedo mencionar a Alemania, cuya ley del 21 de abril de 1933 autoriza la vivisección mediante el recaudo de la autorización para experimentar sobre animales vivos por motivos científicos. En iguales términos, en Noruega, la ley del 7 de junio de 1935 permite la vivisección con per-

miso del rey o de persona autorizada; en Bélgica, la ley del 22 de mayo de 1929 permite la vivisección con fines científicos, exigiéndose anestesia para ello. En igual sentido lo establecen Suiza, en la ley del 20 de noviembre de 1902; Italia, en la ley del 12 de junio de 1931; Nueva York, en la ley de 1950, e Inglaterra en la ley del 18 de agosto de 1911.

Por otra parte, la vivisección, conforme a este artículo, solamente se permite con finalidad científica y en lugares o por personas que estén debidamente autorizadas para ello.

En definitiva, señor presidente, como conclusiones del presente proyecto de ley he de resumir las mismas en cinco puntos a los efectos de señalar la orientación del proyecto para su definitiva aplicación.

Primero: el proyecto incrimina como delito los actos de malos tratos o crueldad contra los animales en base a la atribución que le señala el artículo 68, inciso 11 de la Constitución Nacional;

Segundo: la pena que se establece es la de quince días a un año de prisión, tomándose tales montos en concordancia con el artículo 183 del Código Penal relativo al delito de daño;

Tercero: la enumeración señalada en los artículos 2º y 3º es de carácter taxativo y no enunciativo;

Cuarto: se aplican al sujeto activo del hecho los principios generales de inimputabilidad señalados en el Código Penal; y

Quinto: esta figura delictiva protege el sentimiento moral y ético de la comunidad argentina, en defensa y protección de los animales.

Con estas palabras, señor presidente, dejo informado el presente proyecto de ley en nombre de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos, y solicito de las señoras y de los señores senadores su aprobación.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto. Se hará la correspondiente comunicación al Poder Ejecutivo.

6

MODIFICACIONES DE LA LEY DE IMPUESTOS INTERNOS

(Orden del día número 64)

Sr. Secretario (Reales). — (*Leyendo*):

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión, de la Honora-

ble Cámara de Diputados sobre modificación del artículo 81 y derogación de los artículos 82 y 84 de la ley de impuestos internos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 90 del reglamento del Honorable Senado, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 27 de septiembre de 1954.

Alberto Durand. — Elvira E. Rodríguez Leonardi de Rosales. — María Rosa Calviño de Gómez. — Miguel Angel Bazán. — Blas Brisoli. — Francisco Giménez.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(Septiembre 23 de 1954)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Substitúyese el artículo 81 de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1952) por el siguiente:

Artículo 81. — Destínase al Fondo Nacional de Vialidad, con la afectación prevista en las leyes 11.658 (t. o. 1939) y 14.010 y la excepción establecida en la ley 11.821, el producido de los siguientes gravámenes:

- 1º Impuesto interno de m\$N. 0,07 por litro de nafta.
- 2º Impuesto interno de m\$N. 0,10 por litro sobre todos los aceites lubricantes que tengan la viscosidad y demás características de los destinados a vehículos y motores en general, cualquiera sea su destino.
- 3º Impuesto interno de m\$N. 0,0115 por litro a todo combustible proveniente de la destilación de petróleo, que no sea nafta, cualquiera sea su destino.

Los gravámenes establecidos precedentemente serán abonados por los productores, importadores y expendedores en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo y de acuerdo con las disposiciones del presente título, que les sean aplicables.

Los impuestos fijados en este artículo se aplicarán sin excepción alguna, quedando derogada toda disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 2º — Deróganse los artículos 82 y 84 del citado texto ordenado.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTONIO J. BENÍTEZ.
Rafael V. González.